

# Lo llamaron Transición. Alicante como protagonista

*Llum Quiñonero*

PERIODISTA

llquinyonero@corts.es

Recibido: 10/04/2017

Aceptado: 20/08/2017

## SUMARIO

A partir de los años 60. Alicante  
Llegan las multinacionales  
La vida cultural  
Ideas que dieron vida a la Cruzada  
Clima de incertidumbre y preocupación  
Referencias bibliográficas

**Autor para correspondencia / Corresponding author:** Llum Quiñonero. Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4. 46003, Valencia.

**Sugerencia de cita / Suggested citation:** Quiñonero, Ll. (2018). Lo llamaron Transición. Alicante como protagonista. *Debats. Revista de cultura, poder y sociedad*, 132(1), 125-136. doi: <http://doi.org/10.28939/iam.debats.132-1.9>

Alicante, la última ciudad republicana, vivió la dictadura sometida al régimen, como el total de la ciudadanía española; la ciudad y su gente se agarraron al aire que la apertura económica de los años sesenta trajo, especialmente, con la llegada de turistas que ponían de manifiesto que al otro lado de los Pirineos la vida respiraba otra manera, con derechos y libertades.

Alicante transitó a la democracia con la esperanza de un horizonte que se imaginaba próximo. La bonanza económica de los primeros años atrajo multitudes de emigrantes que multiplicaron los barrios y llenaron con sus hijos e hijas las escuelas; muchos de ellos se sumaron a las movilizaciones laborales e integraron las nuevas organizaciones. Todo el impulso frente al franquismo sin Franco lo puso en la calle la gente cuerpo a cuerpo. Esa fue toda la fuerza, toda la debilidad de la Transición.

Desde el aparato franquista, que buscaba su propia regeneración, con sus propias tensiones internas, se marcaron las condiciones previas y los plazos, tan cortos que en las primeras elecciones seguían en la ilegalidad buena parte de los partidos y con la libertad de expresión cercenada.

La Transición fue un cambio ineludible porque la dictadura quedó descabezada y su cabeza—el dictador—le había dado, con el poder total, el sentido, la estructura y una unidad que, anquilosada con el paso de los años, se descomponía con la muerte de Franco.

En cuarenta años, el terror franquista y la imposición de la hegemonía política e ideológica del régimen construyeron una sociedad sin memoria, estancada, autoritaria en las formas y en el fondo, que, tras el fracaso de la autarquía, acabó sumándose a una

economía de mercado —capitalismo y dictadura— cuyos planes contaron con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. La dictadura generalizó la corrupción en la gestión económica y social —y académica—, una moral de funcionamiento en la que primaban las influencias, el abuso de poder, las recomendaciones y el nepotismo como forma de relación y promoción.

De fondo, un hilo conductor que le dio sustento, la propia Iglesia católica, que sostuvo la España franquista y que fue depositaria de la educación, y a cuyas órdenes religiosas se facilitó la construcción de escuelas y parroquias. Y unas fuerzas económicas bien ancladas en la estructura política, que aprovecharon su posición dominante durante la autarquía y que asentaron sus proyectos con el despegue económico a partir de los años sesenta.

La oposición a la dictadura, la apuesta por la ruptura, tiene en Alicante, como en el resto del país, dos sectores principales:

- Quienes han sobrevivido a la dictadura y han mantenido una cierta estructura y organización a la que se suman, a partir de los sesenta, nuevas generaciones de trabajadores y estudiantes. Los cuadros dirigentes son —sobre todo— sobrevivientes, algunos reductos anarquistas y miembros del Partido Comunista, que han logrado una base clandestina organizada, mantenida también con los apoyos exteriores gracias a la existencia de la URSS, donde residen algunos de sus líderes desde el final de la Guerra Civil.
- Las organizaciones que comienzan a formarse con jóvenes nacidos después de la guerra, que, a pesar de la censura política, social y cultural, reciben clandestinamente información sobre lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos. Son corrientes que no tienen disciplina con el pasado; que ya no dan la batalla sobre los errores de la República ni los enfrentamientos sobre los desacuerdos militares o políticos durante la guerra. Sus preocupaciones pasan por derribar el autoritarismo social, laboral y económico, y la

dictadura desde posiciones que —eso sí— beben en la tradición ideológica de la izquierda, especialmente el anarquismo, el socialismo y el trotskismo. Los nuevos partidos son, en su mayoría, abiertamente críticos con el estalinismo, que representa para muchos la perversión de una idea social igualitaria. Estas organizaciones encarnan las propuestas innovadoras y radicales, que beben del presente y que suman a la llamada lucha de clases demandas culturales, autonómicas, lingüísticas y, más tarde, feministas y ecologistas. Son la generación que militará en las organizaciones de nuevo cuño y que alimentará después los nuevos movimientos ciudadanos.

El pulso de la Transición entre las fuerzas del cambio y lo que entonces se llamó la oligarquía inmovilista, el búnker, se hizo en condiciones de total desigualdad. Las organizaciones derrotadas tras la guerra —que representaban la defensa de una sociedad democrática, libre— carecían, de partida, del tiempo y apoyo social y político suficientes. Afrontaron el pacto político a la vez que salían del ostracismo. Movidas también por el propio ritmo que imponía la crisis franquista, pusieron sobre la mesa unas débiles bases democráticas —que no cuestionaban ni la forma de Estado, ni un reconocimiento amplio de la plurinacionalidad de los territorios, ni la depuración de ninguna de las instituciones, judicial o militar (Ejército, Policía, Guardia Civil), que habían servido de sostén a la dictadura— para ampliar y concretar su lugar en el nuevo marco que también la propia crisis interna del franquismo necesitaba replantear.

De los privilegios de la Iglesia no se habló tampoco. La Transición supuso la desaparición de las instituciones políticas de la dictadura —el propio Movimiento, el Sindicato Vertical, los medios de comunicación a su servicio— con las que era imposible transitar a nada que fuera aceptable como democracia. Todo el personal de esas instituciones pasó a convertirse en funcionarios asumidos por otros ministerios, y los diarios, a retirar el yugo y las flechas de las cabeceras, así como el nombre de la titularidad para continuar rebautizados con otro.

Para transitar del pasado franquista a la democracia del 78 hubo un juego de equilibrios y presiones internacionales con apoyo a los partidos que iniciaban su andadura, al renovado PSOE y a lo que se llamó centro y centro-derecha.

El poder político, el de los medios de comunicación y de los medios represivos jugaron día tras día su baza a favor del cambio tutelado. Hubo apremio. Un apremio que reclamaba la oposición en la clandestinidad, pero quienes marcaban los tiempos eran los que tenían en ciernes una profunda crisis del sistema que había sustentado la dictadura.

---

### A PARTIR DE LOS AÑOS 60. ALICANTE

La economía había comenzado a rodar de otra manera; con el fin de la autarquía —la particular economía del fascismo español—, el nacionalcatolicismo dio paso a lo que llamaron desarrollismo. Los acuerdos con Estados Unidos, especialmente, abrieron las puertas a las empresas y corporaciones multinacionales, en cuyos Consejos de Administración en España la oligarquía tomaba posiciones; así comenzaba a moverse un nuevo mercado laboral, aumentaba la demanda de puestos de trabajo y llegaban a la ciudad miles de personas desde pueblos de La Mancha o del sur y del interior alicantinos. Hasta la capital y los pueblos industriales (Elche, Alcoy, Elda, Petrel, Villena, Castalla, Cocentaina, Ibi y Onil, etc.) llegaba la gente a buscar dónde acogerse, sin viviendas ni puestos escolares, ni la más elemental previsión por parte de las autoridades para recibir lo que empezaba a convertirse en un fenómeno en alza.

Los cambios internos, los culturales, los políticos y los económicos, las transformaciones que dejaron huella en las biografías y en el territorio están atados también al peso de quienes continuaron sosteniendo el poder a la muerte del dictador; como si los profundos impulsos que reclamaban libertades, derechos y mejoras básicas fueran frenados por el impacto de un estado que cambiaba apenas su apariencia, incapaz en sí mismo de hacer algo diferente a lo que había sido su estructura.

Cuarenta años de dictadura —represión, cárcel, campos de trabajo, exilio— habían convertido nuestra sociedad en una realidad rígida, sin contestación posible a la absoluta hegemonía franquista. La escuela, las parroquias, los medios de comunicación, los curas, los cuarteles de la Guardia Civil y las comisarías, el propio Sindicato Vertical y la patronal se encargaban de reiterar el orden de las cosas. Un orden divino y vertical que pasaba por el dictador, aunque este estuviera cerca del final de su propia vida.

Quienes entonces acabábamos de salir de la adolescencia apenas entendíamos el mundo que se movía más allá del entorno inmediato; cundía el autoritarismo del ordeno y mando en todos los ámbitos; solo parecía ser cuestionado por las escasas noticias que llegaban sobre el movimiento jipi, las movilizaciones pacifistas contra la Guerra de Vietnam y algunos reportajes sobre las movilizaciones feministas que cuestionaban el papel de las mujeres como segundo sexo. Comenzaba entonces un incipiente movimiento cultural por la libertad de expresión, tan incipiente como el movimiento ciudadano en los barrios crecidos en la periferia, al albur de la corrupción de próceres locales; tan pequeño —el movimiento ciudadano— como el surgimiento de las agrupaciones de cristianos de base que se sumaban a la reclamación de una «Iglesia de los pobres»—a la que el propio Concilio Vaticano II abrió las puertas con la iniciativa de Juan XXIII— y que había comenzado a crecer en la ciudad y por la provincia, especialmente en zonas obreras, con una presencia tan pequeña como impactante, y vigilada de cerca por la autoridad eclesíástica del franquista obispo Barrachina, además de por la policía político-social.

---

### LLEGAN LAS MULTINACIONALES

Alicante comenzaba a sentir los primeros cambios que pusieron fin a la autarquía y a la escasez total de puestos de trabajo y de condiciones de vida dignas. Los planes de desarrollo vinieron de la mano de acuerdos militares y comerciales con Estados Unidos y también con Canadá. De esos cambios políticos y comerciales, de esa primera apertura económica llegaron a Alicante las

empresas de aluminio, que a finales de los años sesenta contaban con 1.600 empleados; la otra fábrica, que daba trabajo mayoritariamente a mujeres, cigarreras, era la Tabacalera, que en 1972 empleaba a 717 trabajadoras (Comín y Martín, 1999: 462). El puerto mantenía su actividad y la construcción comenzó a demandar más y más mano de obra en un contexto de salarios bajos.

Son los años en los que se suceden grandes pelotazos que marcarán la fisonomía de la ciudad y que caracterizan el estilo corrupto del franquismo —que tendrá poco freno y mucha continuidad más allá de la Transición y que se extenderá hasta el presente. Me refiero —entre otros casos ocurridos en el mismo centro de la ciudad— a la construcción del Hotel Meliá en terrenos públicos y en pleno centro urbano, gestión hecha con las autoridades municipales en los años sesenta y rematada en 1969. Sobre 9.000 metros cuadrados apoyados en el muelle de Poniente, se construyó un hotel en régimen de propiedad del suelo, no de concesión pública, como la legislación vigente permitía. El negocio redondo se establecía desde el entorno más próximo de Franco y de sus compañeros de cacerías, al que pertenecía José Meliá Sinisterra, valenciano, como valenciana era la familia política de otro gran muñidor de negocios, comisiones y tráfico de influencias que fue el hermano del dictador, Nicolás Franco, artífice de la venta de terrenos para la construcción de la fábrica de aluminios, a cuyo consejo de administración perteneció.

El aeropuerto había comenzado a funcionar en 1967 para tráfico nacional e internacional. El turismo empezaba a tomar cuerpo y a generar divisas y puestos de trabajo en el sector servicios, un sector en crecimiento. Para la administración y para tareas técnicas nuevas, los nuevos tiempos reclamaban profesionales, gente formada de la cual se carecía. Desde el comienzo de la dictadura, la educación había languidecido, entregada a manos de la Iglesia católica; la escuela pública estaba compuesta por centros de adoctrinamiento franquista y poco más. En la década de los sesenta, ante las expectativas de crecimiento que se vaticinaban con los cambios económicos, las escuelas religiosas privadas y segregadas, para niños y

niñas, se multiplicaron por la ciudad y sus alrededores, y se pasó de tener escuelas pequeñas en el centro a ocupar espacios con capacidad para centenares, miles de escolares en la periferia.

El colegio Calasancio trasladó su pequeño centro situado en un piso de la calle Mayor a una superficie en la avenida de Dénia, con amplios espacios, canchas de deporte y patios, y dos edificios de cuatro alturas. Lo mismo ocurrió con otras órdenes religiosas. Los Jesuitas disponían, desde 1954, de un colegio con capacidad para más de mil alumnos, y en 1966 también abrieron sus escuelas de empresariales y de idiomas. Algo parecido se dio en el caso de las Teresianas o de los Salesianos y Maristas. En menos de una década se ampliaron las escuelas católicas en amplios espacios de la periferia, para lo cual se obtuvo apoyo financiero de las cajas y bancos de la ciudad. Nada semejante ocurrió con la escuela pública.

En 1968 se puso en marcha lo que sería el embrión de la Universidad de Alicante, como centro de estudios superiores, una especie de colegio universitario vinculado al campus de Valencia, que comenzó con estudios de Medicina, Filosofía y Letras, Química, Derecho y Económicas.

---

## LA VIDA CULTURAL

La actividad cultural, que había brillado por su ausencia, comenzó a mostrar algunas iniciativas a finales de los sesenta. Había dos bibliotecas en la ciudad, las dos, instituciones vinculadas a las cajas de ahorros: la Gabriel Miró y la biblioteca de la Caja de Ahorros Provincial, que durante años habían sido los únicos lugares de silencio donde encontrar libros y estudiar. El cine se convirtió en un espacio de encuentro y de debate con los cinefóruns que organizaban algunas asociaciones como el Cine Club Chaplin (1966), que comenzó a proyectar películas y hacer debates tras cada pase. Un año después, bajo la presidencia honorífica de Oscar Esplà, se creó el Club de Amigos de la Unesco, que congregó en

su sede actividades, debates y, más tarde, también reuniones de las plataformas políticas y algunas iniciativas ciudadanas, culturales y sociales.

Comenzó a gestarse un nuevo ambiente cultural que creaba, vivía y proponía otros contextos para la vida cotidiana. Expresión de ello fueron los grupos de teatro que surgieron por toda la provincia, que llegaron a sumar más de treinta. La Carátula, en Elche; La Cazuela, en Alcoy; Coturno, en Elda, o Alba 70, en Alicante, que además de producir sus propias obras —dentro de lo que entonces se llamó *teatro independiente*— organizaban también festivales de teatro y actuaciones de otros grupos como Els Comediants, el TEI madrileño, Els Joglars y los sevillanos La Cuadra, entre otros. Además, en 1974 inició su andadura el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros, que entonces se llamaba Caja de Ahorros del Sureste de España. Su papel en la ciudad y en los pueblos donde también se abrieron aulas culturales fue decisivo en aquellos años. Por ella pasaron pensadores, intelectuales, académicos y artistas que marcaban los análisis del presente, que comenzaba a reclamar transformaciones sociales y políticas: Tuñón de Lara, Paul Preston, Paul Ricoeur, Edgar Morin, Vázquez Montalbán, Sanchis Guarner, Francisco Ayala, Vicent Andrés Estellés y muchos más llenaron el aula hasta los topes cada jornada que abría sus puertas. La propia Aula disponía de un equipo móvil que recorría los pueblos organizando charlas y debates sobre medios de comunicación, derechos humanos, arte, etc. Además, dio cabida al surgimiento de un centro de debate feminista que años más tarde acabaría conformando el Feminario.

También comenzó a generarse y a hacerse pública una inquietud en defensa de la lengua y de la cultura valenciana. Desde el Club de Amigos de la Unesco de Novelda se comenzaron a dar clases de valenciano y Radio Dénia organizó el I Concurso de Poesía Valenciana. En Alicante se inauguró la librería Set i Míg, con la presencia de Joan Fuster; la librería sería durante los siguientes años un espacio esencial de encuentro y de dinamización de la cultura en *valencià* en Alicante.

Sin cambio político, se estaba produciendo un cambio social que presionaba los correosos límites de la dictadura. Había ya una nueva generación de jóvenes nacidos a finales de los cuarenta y cincuenta para quienes la represión y los horrores de la dictadura no eran asuntos tan visibles como para los que habían sido testigos de lo conseguido por la República y lo arrebatado por el golpe militar. Para los jóvenes, sobre la realidad vivida y la derrota de la democracia, había un abismo insondable repleto de silencios, difíciles de descifrar para quienes llegaban a la vida adulta con todas las energías y mucho desconocimiento. Las derrotas y las victorias del pasado no eran suyas; en gran medida, desconocían su significado.

Los nuevos aires de cambio económico, la moda, la música, la llegada de turistas, la mezcla de gentes venidas de otros pueblos, la ciudad que se agrandaba posibilitaban un marco de menor control social en el que estaba creciendo una generación que nada tenía que perder y que carecía de victorias, pero también de derrotas.

---

### IDEAS QUE DIERON VIDA A LA CRUZADA

La estructura del estado franquista seguía punto por punto su liturgia. El nuevo gobernador civil de Alicante tomó posesión el 7 de septiembre de 1973 y en su discurso habló del papel del Movimiento «siempre al servicio de las ideas que dieron vida a la Cruzada» (Moreno, 2011: 31), hizo un llamamiento a la juventud y se puso a disposición «de esta tierra bendita que regó José Antonio con su sangre fecunda» (Moreno, 2011: 31).

El gobernador tenía bajo su mando a la Guardia Civil, a la Policía Armada y, especialmente, a la Brigada Político-Social, comandada por el inspector jefe Teodoro Robledo Bris, con siete inspectores a sus órdenes —algunos de ellos encargados especialmente de los estudiantes. También actuaban en colaboración con el Sindicato Vertical para controlar las acciones y reuniones de trabajadores, que eran cada vez más frecuentes. Los movimientos de población, el aumento de la actividad económica y

la demanda de puestos escolares y universitarios, de transporte y de atención sanitaria provocaron una nueva actividad que daba pie a reclamaciones y protestas entre jóvenes y también en los sectores obreros sin derechos laborales y con sueldos raquíticos. En 1972 se había iniciado la constitución de Comisiones Obreras en las fábricas, pero los y las activistas trabajaban desde el interior del propio Sindicato Vertical, lo que les permitía un cierto margen de legalidad, y muchos eran elegidos como *enlaces* sindicales.

En 1975, en un informe del Gobierno Civil, la Delegación del Ministerio de Educación advierte de un posible paro en la enseñanza, a lo que el gobernador instruye «servicios correspondientes en el sentido de vigilar adecuadamente el sector con toda la discreción posible» (Moreno, 2011: 31).

Dos años antes, la policía había detenido en Valencia y en el propio CEU alicantino, a 312 estudiantes y los había expulsado de la universidad, entre ellos, a la autora de este artículo (Sanz, 2002).

El atentado que costó la vida al almirante Carrero Blanco, del Opus Dei y mano derecha del dictador, puso en marcha desde el Gobierno Civil una serie de informes diarios que señalaban «absoluta normalidad». Según el Gobierno Civil, había «un cierto malestar por la carestía de la vida». Y la revista del Sindicato Vertical, *Así*, en enero de 1974 indicó que los asesinos de Carrero iban «contra la paz, contra el orden, contra el edificio de todas nuestras conquistas [...] tras más de treinta años de convivencia pacífica»; esta era la realidad construida por el poder que machaconamente se repetía en todos los ámbitos.

El alcalde de Benidorm, Miguel Pérez Devesa, en el diario *Información* de 1974 —prensa de la cadena del Movimiento— se confesaba «hombre del Movimiento, fiel y leal sin reservas al Caudillo, nuestro guía, artífice de la paz y del desarrollo de la patria» (ap. Giménez, 31 de mayo de 2012). Los cambios políticos estaban en ciernes tras la muerte de Carrero, y los graves y evidentes achaques del dictador y quienes constituían la estructura del Movimiento comenzaban a agitarse.

El Gobierno Civil dejaba constancia en sus informes de problemas relacionados con el cierre de empresas en el calzado y la aparición de panfletos comunistas en buzones de barrios de Alicante. En Elche, el salesiano Manuel Subiela pronunció una homilía en la que habló de la represión y apuntó que se vivía bajo «una política de la bota sobre el cuello»; el texto del télex del Gobierno Civil decía «El indicado sacerdote tiene cierta predisposición a las homilias conflictivas» (Moreno, 2011: 73).

---

### CLIMA DE INCERTIDUMBRE Y PREOCUPACIÓN

Pero la tensión iba en aumento por las consecuencias de la crisis económica y la falta de libertades. Los informes policiales describían el ambiente entre los trabajadores del calzado de «un clima de incertidumbre y preocupación [...] de persistir el actual estado de cosas, se pudieran producir alteraciones del orden en fechas más o menos próximas». La situación era difícil; las noticias, malas: cierre de empresas, despidos, suspensión de reuniones, como la solicitada por unos grupos de trabajadoras de Elda y Aspe para tratar de la discriminación laboral de las mujeres (ap. Moreno, 2011: 77).

Entre los trabajadores de la banca, los de la basura, del metal y de la construcción, y las trabajadoras del textil, las protestas comenzaban a generalizarse. Trescientos alumnos y alumnas de Magisterio se presentaron en Correos para enviar telegramas al ministerio defendiendo sus reivindicaciones; el claustro del profesorado apoyó al alumnado. La estructura franquista, anquilosada, se tambaleaba. Tres de cada diez niños y niñas en Alicante carecían de puesto escolar, lo contaba el diario *Información* en mayo de 1974. En Petrel, un grupo de vecinos y vecinas del barrio de la Tafalera se dirigió al Ayuntamiento para exigir alcantarillado. La Tafalera creó la primera asociación de vecinos de la provincia, después llegaron otras, como la de Divina Pastora, en Alicante, que se constituyó legalmente en 1975.

El 12 de febrero de 1974 el presidente del Gobierno, sustituto del almirante Carrero Blanco, anunció en un discurso televisivo lo que se llamó la apertura,

«el espíritu del 12 de febrero». Una apertura que entendía «basada en la creación de partidos políticos integrados en el seno de los Principios Fundamentales del Movimiento, descartándose las viejas denominaciones y sobre todo los extremismos». O sea, un absurdo.

En el télex enviado a Madrid el 13 de febrero desde el Gobierno Civil de Alicante se alababa la decisión de Arias Navarro de afrontar «el anquilosamiento del Sistema». El «aperturismo» de Arias Navarro nacía muerto, incapacitado para dar los pasos que la situación reclamaba ante una crisis social de enorme magnitud. El eje central del franquismo era el dictador y estaba viviendo sus últimos meses.

La crisis política de la dictadura iba acentuándose a la vez que crecía el deterioro de las condiciones económicas de una burbuja económica, que había estallado atropellada por su propia lógica interna, la corrupción que la definía como sistema de funcionamiento, y en mitad de una crisis internacional del petróleo. Desde Crevillente hasta Alcoy, desde el textil al metal, aumentaban las protestas del movimiento obrero ante despidos, bajos salarios o cierres patronales.

A finales de septiembre, el día 27, el Consejo de Ministros presidido por Franco, ya muy enfermo, dio cuenta de las sentencias de muerte decididas por cuatro consejos de guerra a cinco jóvenes activistas. Esa misma madrugada eran fusilados los cinco, a pesar de la oleada de protestas internacionales, de manifestaciones populares y de la respuesta interior, tan ensordecida como el peso de la represión marcaba.

Recuerdo el impacto de aquella noticia en Alicante, la rabia, la necesidad de dar algún tipo de respuesta. Grupos de jóvenes salieron entonces a la calle en manifestaciones relámpago, en las que repartieron panfletos al grito de: «Franco asesino». El dictador, al que apenas le quedaban unas semanas de vida, seguía el curso de su propia biografía convirtiendo el terror en su fuerza.

Franco estaba en las últimas, se moría irremediablemente. Y tras su exhibición pública el 1 de octubre de 1975 en la plaza de Oriente de Madrid para recibir un baño de multitud falangista al grito de «¡Franco, Franco, Franco!», empeoró para no recuperarse ya, a pesar de los intentos de disimular su mal estado, de alargar hasta la extenuación su agonía y hacer coincidir su muerte con la fecha del fusilamiento de José Antonio. El 19 de noviembre el diario *Información* hablaba de la «situación extrema de Franco». Como cada año, se realizaban las acciones de homenaje a José Antonio Primo de Rivera el 20 de noviembre, el día del aniversario de su fusilamiento en la ciudad de Alicante. En lo que entonces se conocía como la *casa prisión de José Antonio*, hoy convertida en un albergue juvenil, estaba concentrada la flor y nata de las autoridades locales del Movimiento y falangistas de toda la provincia. Según relató en dicho diario el periodista José María Perea, el sacerdote que celebraba la misa por José Antonio dijo: «Dos hombres hoy se juntan, dos hombres más allá de los luceros». En el patio de la enfermería algunos dirigentes falangistas, entre ellos José Cholbi Diego,<sup>1</sup> partieron hacia Madrid.

En Alicante, el obispo de la diócesis, Pablo Barrachina, envió un telegrama de pésame a El Pardo: «Por nuestro amadísimo Caudillo y Jefe de Estado». Ordenó que todas las campanas doblasen a muerto en todo su obispado. En la homilía de la misa de duelo, en San Nicolás, con la iglesia a rebosar de uniformes, trazó un paralelismo entre Isabel la Católica, Felipe II y Franco, quien —dijo— nunca había vivido para él sino para España.

Mientras sonaban las campanas, miles de hogares, de familias, de jóvenes y no tan jóvenes celebraban discretamente el fin del dictador.

Para el poder político franquista, eran momentos de extrema tensión e incertidumbre. El Gobierno Civil desplegabla las medidas de control, la conocida

<sup>1</sup> Hoy *síndic de greuges* de la Comunitat Valenciana. Fue subdirector general de Formación Profesional en el primer Gobierno de Carlos Arias Navarro.

Operación Lucero, mediante la cual la situación se consideraba, incluso, como de excepción y guerra. Para la situación menos grave, se proponía «la localización y detención de los principales elementos subversivos» (Vilches, 04 de abril de 2017) en una operación minuciosamente preparada, simultánea y por sorpresa, en la que se llevaría a cabo la comprobación de identidad, de domicilios y de lugares de trabajo.

La muerte de Franco supuso una especie de disparo de salida de una carrera, dentro y fuera del aparato del Movimiento, para colocarse en mejor situación para el cambio que ya se afrontaba. Ahora con Juan Carlos de Borbón convertido en rey —como solución de continuidad—, proclamado el 22 de noviembre, apenas un mes después de la muerte del dictador.

En informe del Gobierno Civil del 24 de noviembre de 1975 se decía que en sectores del pueblo había confianza en el rey, «incluso en sectores no monárquicos», ya que «tenía un estilo más adecuado a los tiempos y dentro de las enseñanzas que Franco le ha procurado».

La amnistía de presos antifranquistas era una reclamación unánime, pero Juan Carlos se limitó desde su posición de monarca a conceder un indulto que no recayó en presos políticos, sino en presos comunes que cumplían penas en la cárcel alicantina.

Y con la proclamación del rey Juan Carlos, también comenzaron a aparecer banderas republicanas y panfletos contra la monarquía. La reclamación de amnistía comenzó a ser una demanda unánime que se unió pronto a la reclamación de autonomía. Y algunos grupos políticos, desde el Partido Comunista a los grupos situados a su izquierda (partidos como el Movimiento Comunista del País Valencià, la Liga Comunista Revolucionaria, el Partido del Trabajo de España, el Partido Comunista Marxista Leninista y otros pequeños y activos grupos), fueron sumándose a la movilización. El PSOE atravesaba su propia crisis con su división interna y su debilidad, y aparecían partidos socialistas autonomistas como el PSPV o comenzaban a asomar otros como el PSP, en el que destacaba el liderazgo del profesor Tierno Galván.

El obispado continuaba su *cruzada* franquista, que pasaba por el control y denuncia de los sectores cristianos díscolos, tanto seculares como religiosos. Y usaba el peso de su autoridad y el de sus párrocos para defender el más rancio y represivo inmovilismo. Desde el *Boletín Oficial del Obispado*, en diciembre de 1975, el obispo aseguraba que los católicos no podían admitir las ideologías marxistas y comunistas, pero —insistía— tampoco podían «admitir los viejos sistemas liberales, injustos, porque exaltan demasiado la libertad individual e impiden cualquier limitación social». Y, sin embargo, concluía animando a sus parroquianos a participar «con santa libertad, sin renunciar a sus convicciones lícitas» (Barrachina, 1975).

Con la muerte de Franco se produce una especie de desborde de las aguas estancadas. La presión aumenta desde dentro y desde fuera del sistema; es la crisis aguda del franquismo por antonomasia, con movimientos internos de conservación y externos, y múltiples de ampliación, de superación, de ruptura. Parte del aparato franquista, desde el Movimiento al Ejército, la Falange y el Sindicato Vertical afirman su continuidad; pero con grietas, divisiones, cuadros y dirigentes que se afanan en buscar salidas ajustadas a las propuestas de apertura, buscando acomodo en el futuro que está al caer.

En las calles, comienzan a tener más presencia activa organizaciones de extrema derecha, que atacan a militantes de partidos de izquierda, a trabajadores movilizados, a jóvenes estudiantes en manifestaciones; son también los que atacan librerías como ocurre reiteradamente contra Set i Mig en Alicante o Crida en Alcoy, o mandan anónimos personales con amenazas de muerte.

*Fuerza Nueva* pasó de ser una revista, fundada en 1966, cuyo delegado en Alicante era Agatángelo Soler (alcalde desde 1954 hasta 1963), a convertirse en una organización. Su primer acto en Alicante fue en Pedreguer, en diciembre de 1975. La propaganda del acto decía: «Justicia social frente a liberalismo. Unidad nacional contra separatismo. Dignidad nacional frente a cipayismo» (ap. Moreno, s. f.: 2). Aparecieron otros

grupos de extrema derecha, desde CEDADE (Círculo Español de Amigos de Europa) a GAS (Grupos de Acción Sindicalista), Guerrilleros de Cristo Rey, Frente Nacional y algunos más.

La oposición tejía sus alianzas en las diferentes plataformas. Las que venían de la mano de la Junta Democrática, donde era hegemónico el Partido Comunista y que contaba en sus filas, incluso, con miembros destacados del Opus Dei como Calvo Serer, a la Plataforma Democrática. Ambas plataformas —que acabarían uniéndose en Alicante y en todo el País Valenciano en la Taula de Forces Polítiques i Sindicals— resumían las alianzas que desde la oposición eran susceptibles de acercamiento, en un proceso veloz e intenso que cambiaba el panorama a diario. Frente al continuismo, la oposición apostaba por la ruptura.

En 1976, las movilizaciones iban en aumento; en Alcoy, en el textil; en la construcción; en la enseñanza; en el calzado, en los que alcanzaron sus momentos de máxima tensión en mitad de un proceso de disolución del Sindicato Vertical. Este había sido movido por la presencia de un amplio sector de militantes sindicalistas que pusieron en marcha un movimiento asambleario para negociar el conflicto del calzado a lo largo de todo el valle del Vinalopó, desde Villena hasta Elche. Reclamaban el fin del Sindicato Vertical y mejoras salariales. Cundió la huelga por el valle y se manifestaron los y las trabajadoras en días sucesivos, con la policía antidisturbios vigilándoles los pasos (ap. Moreno, 2011: 298).

En Elda, el 24 de febrero, tras disolverse la asamblea de trabajadores, la policía armada disparó contra unos jóvenes y caía muerto Teófilo del Valle, de 22 años, un emigrante gallego llegado a Elda, como tantos otros, en busca de mejorar su vida. Su muerte supuso un golpe contra el movimiento asambleario, una amenaza de lo que podía ocurrir si se seguía por el camino de la movilización que tuvo sus consecuencias inmediatas. Su entierro fue acompañado de diez mil personas, según la prensa. Y también de la guardia civil, que controlaba los accesos al cementerio de Elda.

Sometidos a la vigilancia de la policía, bajo la amenaza de detenciones, hubo manifestaciones y actos de repulsa en toda la provincia, como una manifestación relámpago —que entonces llamábamos *salto*— por la calle Sevilla, en Alicante, al grito de «Estudiantes con obreros». Otra de estudiantes del CEU, varios cientos de personas que fueron disueltas por la policía y algunas de ellas detenidas. Hubo protestas en Magisterio y en la fábrica de aluminio, ENDASA. El pequeño comercio cerró en Monóvar y hubo paros en Petrel. El Movimiento Comunista del País Valencià distribuyó un panfleto con el título: «¡La policía ha asesinado a un compañero!», según citaba en su informe a Madrid el Gobierno Civil, el 3 de marzo de 1976. En Elche, la multitud abarrotó la basílica de Santa María, donde se celebró una misa por el joven asesinado, pero varios cientos de personas abandonaron la iglesia al comprobar que el sacerdote no hacía mención de las circunstancias de la muerte de Teófilo.

El 29, la oposición convocó una manifestación que, por supuesto, era ilegal, que fue disuelta y en la que detuvieron a numerosos dirigentes. El Gobierno Civil informaba: «Dicha propaganda de origen declaradamente comunista [...] [trata de] dificultar la evolución pacífica hacia la convivencia democrática en nuestra Patria, acciones que, por lo mismo, no pueden ser toleradas» (Moreno, 2011: 313).

Pasaron los meses. El sargento que mató a Teófilo del Valle, Daniel Aroca, fue procesado y absuelto en el consejo de guerra celebrado en el cuartel de Benalúa de Alicante. La sentencia absolutoria se realizó en aplicación de la eximente 11 del artículo 8 del Código de Justicia Militar: «obrar en cumplimiento del deber», según relataba el diario *Información* el 7 de julio de 1976.

La represión no haría más que aumentar. En Alicante y en todo el país, en todo el estado. El que fuera ministro nacional del Movimiento, Adolfo Suárez, en el primer gobierno tras la muerte de Franco sustituyó a Arias Navarro como presidente del Gobierno, con la apuesta de ir más allá en la reforma de lo que él había sido capaz de ir. La reforma retomó con Suárez la vía rápida. Y los ataques por parte de grupos de extrema

derecha y de las fuerzas de la Policía y de la Guardia Civil a manifestantes, diarios, revistas, librerías y estudiantes aumentaron. Se habían descolgado los símbolos del Movimiento de sus sedes y se había disuelto el Sindicato Vertical. El año 1976 se despidió con la disolución del Tribunal de Orden Público, aunque se mantenía a todos sus miembros en otras funciones de la judicatura. Enero de 1977 fue un mes trágico, con el ataque a cinco abogados que fueron asesinados en Atocha, Madrid.

Los partidos seguían en la ilegalidad. Y la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià lanzó una campaña para recoger firmas a favor de la amnistía total y la legalización de partidos y sindicatos. En la cárcel de Alicante, entre otros presos, estaba Fernando Carballo, un militante anarquista que sumaba ya 21 años de prisión.

En doce meses, desde el Gobierno de Suárez se aceleraron los planes para las elecciones. Con la promesa de la legalidad y las negociaciones a dos bandas, las plataformas unitarias comenzaron a resquebrajarse, en una carrera para ver quien se situaba antes y mejor. Esta cuestión afectaba especialmente a la izquierda, en la que los viejos partidos aparecían como la apuesta previsible de un electorado cuyo comportamiento era difícil prever.

La muerte de Miguel Grau fue el segundo episodio cruento de la Transición en Alicante, a consecuencia del ataque de un militante de Fuerza Nueva contra un grupo de activistas del Moviment Comunista del País Valencià que pegaba carteles en la plaza de Los Luceros, el 5 de octubre de 1977, en pleno centro de la ciudad. Pegaban carteles que convocaban, por primera vez, a una manifestación unitaria, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, en defensa de la autonomía del País Valenciano. El ataque, las circunstancias de aquella convocatoria y la muerte de Miguel se produjeron en el contexto de un cambio que se vivía como una especie de simulacro de transformación social en el que el poder seguía valiéndose de sus propias instituciones y de la extrema derecha para frenar las fuerzas del cambio.

Miguel Grau murió diez días después de la agresión, sin recobrar el conocimiento. Más de 20.000 personas acompañaron el féretro desde la residencia sanitaria hasta la plaza de toros, donde la policía arrancó el ataúd a golpes y lo introdujo por la fuerza en un coche fúnebre que salió a toda velocidad, dejando a la multitud abandonada a su duelo y a la rabia. Es día, la ciudad estuvo recorrida hasta bien entrada la noche por grupos de manifestantes gritando en defensa de la democracia y exigiendo la dimisión del gobernador civil.

Fue para preservar la memoria de Miguel y en defensa de la justicia que se creó una plataforma de apoyo a una acción popular, que actuó como parte acusadora. Quien escribe este artículo —que estaba aquella noche pegando carteles junto a Miguel Grau— encabezó entonces la iniciativa con un amplio grupo de ciudadanos más. El juicio contra Panadero Sandoval, el autor de la muerte, que lanzó un trozo de ladrillo de más de un kilo de peso desde el balcón de su casa y le dio en la cabeza a Miguel Grau, fue detenido días después y no salió de prisión hasta después del juicio. Fue condenado y también indultado en 1979 por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia del Gobierno de Suárez, Íñigo Cavero.

Su proceso fue la puesta en escena del estado de cosas en aquella transición. El fiscal jefe de Alicante era entonces Francisco García Romeu; había empezado su carrera jurídica participando en los consejos de guerra en la ciudad, tras la ocupación franquista. Los abogados defensores de Miguel Panadero Sandoval<sup>2</sup> fueron significados derechistas vinculados a Fuerza Nueva. El pasado salía al paso del presente, se abrían las puertas y se cerraban a la vez. Lo que se escapó entre una y otra acción pudiera ser el resultado de lo que se construyó como democracia.

La dirección del cambio estuvo siempre en manos del poder franquista, que apostaba por su actualización. La amenaza de involución fue constante y el Ejército se

<sup>2</sup> Después se cambiaría los apellidos por Miguel Díaz, Panadero Sandoval, para seguir su carrera profesional como procurador de los tribunales en la ciudad de Valencia.

encargó de señalar donde estaban los límites. El Ejército pasó con mucha dificultad por la legalización del PCE, pero no por el cuestionamiento de la monarquía, ni por la construcción del estado federal, ni por una democracia en la que se pidieran cuentas y se apartara a responsables franquistas; por todo eso no pasó. Tampoco se cuestionó la propia bandera que había sido emblema de la dictadura.

Los pactos de la Moncloa, la propia Constitución supusieron entonces el principio y el fin del pacto político entre las élites; el apoyo de una mayoría de las fuerzas parlamentarias a un acuerdo de Estado con el Gobierno de Suárez dejaba fuera asuntos centrales, con una oposición que seguiría viva pero ensordecida y minoritaria. Los límites que mostraba el consenso pasaron de soslayo, como un mal menor, con el acicate siempre de la amenaza de un aparato represor que dio sobradas muestras de su capacidad de atacar reiteradamente, de minar las expectativas, de sembrar el miedo.

El 23 de febrero de 1981 —con la entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados— la Transición puso el punto final a los límites del cambio. Lo que había comenzado con la muerte de un general convertido en dictador, en 1975, terminó con un intento de golpe de Estado militar frente al que el rey —educado por Franco para ser actor del continuismo— aparecía como garante de la democracia. Seis años de incertidumbre, de zozobra, de represión y continuas amenazas, de crisis económica y política.

La noche del 23 de febrero en Alcoy salieron algunos tanques a la calle. En cada casa, en cada uno de los pueblos y ciudades, la gente se replegó aterrorizada por la música militar y las órdenes de estado de alerta que se recomendaban desde las emisoras de radio. Las tiendas de alimentos y las gasolineras quedaron desabastecidas.

Poco después de las 19.30 horas, el general Milans del Bosch hizo público un bando en el que declaraba el estado de guerra. La Policía y la Guardia Civil se acuartelaron. Las calles y las carreteras quedaron

desiertas. Los partidos y la militancia activa se pusieron a salvo y muchos documentos fueron entonces destruidos.

Yo me encontraba entre un pequeño grupo de activistas que seguimos las noticias en un domicilio en el que nos pensábamos protegidos, y preparamos panfletos para repartirlos a primera hora de la mañana, en los que reclamábamos una democracia que ningún ejército pudiera tutelar.

Habíamos atravesado tiempos difíciles. Pero aquellos en los que entrábamos no iban a dejar de serlo. La imagen del rey en la pequeña pantalla que apareció de madrugada no dejaba claro el sentido de lo ocurrido.

Tras la aparición del rey en la televisión, en el Gobierno Civil de Alicante se recibió la orden de reintegrar el mando a la autoridad civil. Según relató el diario *Canfali*, el 26 de febrero de 1981, cuando de madrugada los gobernadores militares de Valencia y Castellón fueron a detener a Milans del Bosch, este se resistió y exhibió un arma reglamentaria.

Pero la amenaza había surtido efecto. El terror se había actualizado de golpe en todos los cuerpos, en todos los pueblos, en todos los barrios de las grandes ciudades; el miedo replegaba las exigencias de la movilización en la calle y de quienes habían votado no a la Constitución.

El día 27, inmensas movilizaciones recorrieron las calles de todo el país: «Por la libertad, la democracia y la Constitución». No más banderas ni más consignas. Aquella manifestación mostraba el significado de lo que se embellecía llamándolo *consenso*. En Alicante, la manifestación reunió a 50.000 personas, según los organizadores. Era una manifestación unitaria a la que se unieron muchos alcaldes que convocaron con bandos municipales y fletaron autobuses desde los pueblos. Los partidos de la izquierda sin representación parlamentaria, Moviment Comunista del País Valencià (MCPV), Liga Comunista Revolucionaria (LCR), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Jove Germania, Juventud Co-

munista Revolucionaria (JCR), entre otros, participaron en un bloque diferenciado, en el que gritaron consignas por la disolución de los cuerpos represivos.

En una nota que hicieron pública los convocantes, reproducida por el diario *La Verdad*, de 27 de febrero de 1981, se decía:

Ante los gravísimos sucesos que han tenido lugar entre los días 23 y 24 de febrero, y en los que grupos de golpistas intentaron destruir las instituciones democráticas que el pueblo español mayoritaria y libremente se ha dado, secuestrando

e injuriando gravemente al Gobierno y al Congreso de los Diputados, los partidos políticos y centrales sindicales de la provincia manifiestan, masiva y responsablemente, su firme apoyo a las instituciones, su inequívoca defensa de la democracia [...] y su apasionada voluntad de vivir como seres libres.

Uno de los heridos de aquel intento de golpe de Estado fue el proceso autonómico. El valenciano, en particular.

La Transición era aquello que teníamos delante de las narices.

---

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barrachina, P. (1975). Ante la nueva etapa de la Historia. *Boletín Oficial del Obispado de Orihuela-Alicante*, 95.
- Comín, F., y Martín, P. (1999). *Tabacalera y el estanco de tabaco en España*. Madrid: Fundación Tabacalera.
- Giménez, E. (31 de mayo de 2012). Alicante en la Transición. *Informacion.es*. Recuperado el 30 de marzo de 2017 de <http://www.diarioinformacion.com/arte-letras/2012/05/31/alicante-transicion/1259625.html>
- Moreno, F. (2011). *La transición a la democracia en la provincia de Alicante*. Alicante: Diputación Provincial de Alicante / Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.
- Moreno, F. (s. f.). Fuerza Nueva y la extrema derecha. En F. Moreno, *La Transición Democrática en Alicante*. Recuperado el 29 de marzo de 2017 de <https://archivodemocracia.ua.es/es/documentos/publicaciones/la-transicion-en-alicante/03-fuerza-nueva-cedade.pdf>
- Sanz, B. (2002). La represión masiva del movimiento universitario. 1968-1975. En B. Sanz, *Rojos y demócratas. La oposición al franquismo en la Universidad de Valencia. 1939-1975* (p. 233-266). Valencia: CCOO PV, FEIS y Albatros. Recuperado el 20 de marzo de 2017 de <http://memorialuniversitario.com/wp-content/uploads/2011/04/rojos-y-demo%CC%81cratas.pdf>
- Vilches, J. (04 de abril de 2017). «Operación Lucero»: El plan secreto para preparar la muerte de Franco. *La Razón*. Recuperado el 18 de noviembre de 2017 de <https://www.larazon.es/cultura/operacion-lucero--el-plan-secreto-para-preparar-la-muerte-de-franco-MO14839324>